



TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN

SALA LABORAL

Medellín, mayo 9 de 2023

Radicado: 05001 31 05-009-2019-00272-01
Demandante: NORELIA DEL SOCORRO PATIÑO MOLINA
Demandado: COLPENSIONES y FABRICATO
Asunto: APELACIÓN DE SENTENCIA
Tema: CÁLCULO ACTUARIAL

La Sala Sexta de decisión, presidida por el magistrado ponente DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN, e integrada por las magistradas MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA Y ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ, procede a emitir sentencia dentro del proceso ordinario laboral de la referencia; decisión que se emite en forma escrita atendiendo a las disposiciones del artículo 13 de la ley 2213 de 2022.

Acreditados los presupuestos procesales y sin que se evidencian causales de nulidad que invaliden lo actuado, se procede a emitir la presente decisión.

ANTECEDENTES

Señaló la demandante que entre el 21/07/1980 al 16/12/2001 laboró laborales para la sociedad Diversificación Industrial San Pedro, en adelante DIVISA empresa filian de la accionada Fabricato SA, sin que el empleador hubiera realizado cotizaciones al sistema pensional entre el hito inicial y el 01/04/1994. Expuso que solicitó a Colpensiones el reconocimiento pensional, siendo negado en resolución GNR 200692 de 2013 indicando que acopiaba 837 semanas de cotización.

Bajo estas premisas reclama de Fabricato SA como empresa controlante de Diversificación Industrial San Pedro el pago de las cotizaciones no realizadas entre el 21/07/1980 y el 30/03/1994; a la vez pretende de Colpensiones el reconocimiento

de la pensión de vejez como beneficiaria del régimen de transición pensional, cuyo disfrute pretende a partir del 8 de julio de 2009, al igual que reclama el pago de los intereses de mora de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993.

Como respuesta a la acción Fabricato se opuso a la prosperidad de las pretensiones que le incumben destacando que esta entidad es ajena a las responsabilidades de la empresa Diversificación Industrial San Pedro, donde solo tenía una relación como socio, sin que ambas empresas tuvieran el mismo objeto social, en adición que en el periodo reclamado no existía obligación de cotizar en el lugar de prestación del servicio, por falta de cobertura del extinto ISS. A su turno el Colpensiones señaló que no hay lugar al acceso a la pensión de vejez al no satisfacer la densidad de cotización necesaria

En sentencia de primera instancia declaró la existencia de una relación laboral de la señora Patiño Molina con la sociedad DIVISA entre el 21/07/1980 al 16/12/2001 y la existencia de unidad de empresa de esta empleadora y Fabricato SA, la que halló demostrada por la anotación en el certificado de existencia y representación que da cuenta de la situación de control respecto a Divisa a partir del 13/08/1996, además por los dichos de los testigos que expresaron que la materia prima y pago de sus salarios siempre provino de Fabricato.

Bajo esta figura estableció que las obligaciones insolutas del empleador se hacen extensibles a la sociedad controlante dentro de la situación de unidad de empresa, por lo que ordenó a Fabricato al cubrimiento del cálculo actuarial o título pensional por el total del tiempo de servicio, previa liquidación por parte de Colpensiones.

De forma correlativa estableció el derecho de la demandante al acceso de la pensión de vejez como beneficiaria del régimen de transición pensional con remisión a las premisas del Decreto 758 de 1990 al superar los 55 años de edad y acumular 1590.85 semanas de cotización, cuyo pago ubicó a partir del 8 de mayo de 2016 (dados los efectos de la prescripción extintiva teniendo en cuenta la data de presentación de esta acción) en cuantía de 1 SMLMV a razón de 14 mesadas

anuales, pudiendo descontar del retroactivo lo reconocido como indemnización sustitutiva de la pensión de vejez. Absolvió de la condena por intereses de mora y en su lugar impuso la indexación de las condenas.

Inconforme con la decisión fue **recurrida por la activa** quien disiente de la declaratoria de prescripción, efecto que en su sentir se interrumpió con la previa demanda de radicado 05001-31-05-017-2017-00558, debiendo contarse desde el 14 de junio de 2014.

A su turno **Fabricato** insistió en la improcedencia de las pretensiones, en especial disintió de la asunción del cálculo actuarial refiriendo que conforme al certificado de existencia y representación de esta accionada la situación de control respecto de la sociedad DIVISA se generó en agosto de 1996, sin que previo a tal data pudiera predicarse una situación de unidad de empresa, por tanto, el eventual título pensional que lo es por cotizaciones anteriores al año 1994 no puede imponerse a Fabricato. Insistió en los presupuestos de configuración de la unidad de empresa que lo es el predominio económico, control financiero el que no se demostró previo al año 1996, condición de la que no podrían dar fe los testigos, quienes sirvieron como operarios de confección, pero no fungieron como directivos en el área financiera, resaltando que Divisa SA tenía relación comercial con otras entidades diferentes a Fabricato.

De forma subsidiaria indicó que en el evento de ordenarse el pago del título pensional lo sería solo respecto al tiempo que fuere necesario para el acceso a la pensión de vejez y en ningún caso hasta el año 2001, en tanto a partir de la entrada en vigencia del sistema general de pensiones y cobertura en el lugar de prestación del servicio sí se hicieron aportes, sin que sea procedente la liquidación del título pensional conforme al Decreto 1887 de 1994 que incluye intereses compuestos, toda vez que ni Divisa SA ni Fabricato están en mora de esos aportes, ya que previo al año 1994 no existía posibilidad de realizarlos.

Por último, **Colpensiones** se opuso a la condena en costas señalando que esta entidad fue ajena a las omisiones que reprocha la accionante.

ALEGATOS

Concedido el término que establece el artículo 13 de la ley 1322 de 2022 donde la activa y la accionada Fabricato reiteraron sus argumentos de demanda y defensa, en particular esta accionada insistió en la imposibilidad de trasladar o asumir la responsabilidad de la empresa empleadora de la actora.

CONSIDERACIONES

Atendiendo a los elementos de prueba adosados al trámite y los aspectos no controvertidos en este caso se encuentran por fuera de discusión que **1)** Norelia del Socorro Patiño Molina nació el 8 de julio de 1954 (pág.16); **2)** Que prestó servicios para la empresa Diversificación Industrial San Pedro SA a partir del 21/07/1980 desempeñándose como operaria en el Municipio de San Pedro - Antioquia (pág 18/20); **3)** Que el 13 de junio de 2013 solicitó de Colpensiones el reconocimiento de la pensión de vejez, la que fue negada en resolución GNR 200692 de 2013 indicando que la afiliada acumulaba 837 semanas cotizadas, lo que resultaba insuficiente para causar la prestación de cara a las premisa de la Ley 797 de 2003 (pág 22/23); **4)** Que solicitó la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez concedida y reliquidada mediante resolución GNR 239725 de septiembre 25 de 2013, concediendo un pago único en el año 2014 por valor de \$6´131.558 (así indica la resolución GNR 304326 de 2016 – pág 33/36); **5)** que adelantó un proceso ordinario laboral en contra de Colpensiones pretendiendo el reconocimiento de la pensión de vejez como beneficiaria del régimen de transición pensional donde no se incluyó como tema de debate el cubrimiento del cálculo actuarial por los ciclos previos a abril de 1994, proceso cursado bajo el radicado 05001-31-05-017-2017-0558 cuyo resultado fue absolutorio en ambas instancias (pág 38 expediente escaneado y audio archivo N° 7).

En ese orden de ideas, de conformidad con los reparos expuestos por los apelantes y revisada la decisión en el grado de consulta, corresponde a esta corporación determinar la procedencia del pago del cálculo actuarial por el tiempo de servicio en

que el ex empleador DIVISA no realizó cotizaciones al sistema pensional, en caso positivo se evaluará la responsabilidad de Fabricato de esa condena. De igual forma se establecerá la procedencia del acceso a la pensión de vejez deprecada.

CÁLCULO ACTUARIAL

Pues bien, en lo que tiene que ver con el pago de título pensional por parte de los empleadores en la época en que no existía cobertura, ha sido un tema con diferentes interpretaciones por parte de la jurisprudencia de la Sala Casación de la Corte Suprema de Justicia, en tanto la corporación consideraba que la falta de cobertura del extinto ISS en algunas zonas del país eximía a los empleadores de las cotizaciones y/o afiliaciones que no se realizaron con anterioridad a la vigencia de la ley 100 de 1993; empero tal postura se modificó como puede observarse en sentencias de radicado N° 32922, de 22 de julio de 2009, N° 38225 del 13 de marzo de 2012 y de forma diáfana a partir de la sentencia SL 9856 de 2014 exponiendo que pese a la falta de cobertura o llamamiento a inscripción por parte de la entidad de seguridad social, en atención al artículo 76 de la ley 90 de 1946 al empleador se le exigía realizar el **aprovisionamiento** de capital necesario para garantizar el acceso al derecho pensional de sus trabajadores, ya que estaba bajo su responsabilidad el cubrimiento de las contingencias de IVM y por tanto tal tiempo debe tener incidencia en la conformación de las prestaciones, no puede ser obviado, como tampoco puede el trabajador ver frustrados los derechos pensionales (al respecto la sentencia SL 4292 de 2022, que a la vez se remite a consideraciones de previas decisiones entre ellas la CSJ SL 2879 de 2020, así:

“Ahora, la jurisprudencia de la Sala también ha establecido que en estos eventos el cálculo incluye todo el período laborado por el empleado porque mientras el ISS no subrogara al empleador en sus obligaciones, este tenía la responsabilidad total respecto al riesgo pensional del trabajador. Además, el empleado no puede asumir las consecuencias negativas de la falta de previsión del ordenamiento legal en estos casos ni mucho menos ver afectados sus derechos laborales, en especial, cuando lo que está de por medio es la validación de unos tiempos para el reconocimiento y goce de la pensión de vejez (CSJ SL2879-2020)”

Conclusión que se fortifica en las premisas del artículo 33 de la Ley 100 de 1993 que para efectos de acopiar la densidad de cotización necesaria para acceder a las pensión de vejez, permite computar *“El tiempo de servicio como trabajadores*

vinculados con empleadores que antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993 tenían a su cargo el reconocimiento y pago de la pensión, siempre y cuando la vinculación laboral se encontrara vigente o se haya iniciado con posterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993”

Adicionalmente, la Sala Laboral de la H. Corte Suprema, ha considerado que la norma a regular los efectos de la falta de afiliación o la mora en los aportes, **es la vigente al momento de la causación de la prestación reclamada**, ello con arreglo a principios de la seguridad social, tales como universalidad e integralidad. (sentencia SL 14388 DE 2015), y que es la norma vigente al momento en que se suceden los supuestos fácticos contemplados en la norma, la que debe presidir la solución de la controversia» (CSJ SL1419-2018), debido al carácter retrospectivo que tienen las disposiciones de la seguridad social.

En el anterior contexto, es claro que con la Ley 100 de 1993 los tiempos de servicios que las personas trabajaron con anterioridad a su vigencia sin cotización a alguna entidad de previsión social independientemente de su causa -omisión del empleador o falta de cobertura- deben ser respaldados o validados a través de un cálculo actuarial a cargo del empleador, trasladado al respectivo ente de seguridad social para financiar las eventuales prestaciones pensionales, prestación que, desde luego, deberá incluir en su totalidad el tiempo servido por la persona.

Con estas premisas se descende al **caso concreto** donde quedó plenamente establecido que desde el 21/07/1980 se dio inicio a una relación laboral entre Norelia del Socorro Patino y DIVERSA, con ubicación en San Pedro de los milagros lugar donde la cobertura del extinto ISS inició el 01/04/1994, empresa que realizó aportes al sistema de seguridad social en pensiones a través de la AFP Porvenir entre el 01/05/1994 al 16/12/2001 (pág 61/66).

También se estableció que Colpensiones reporta la recepción de los recursos acopiados en el RAIS, además que a partir del mes de julio de 2002 y hasta marzo de 2012 recibió y computó las cotizaciones la señora Patiño Molina a través del

régimen subsidiado en pensiones, con un acumulado de 876.43 semanas (pág 308/318)

En adición se destaca que previo a la vigencia de la Ley 100 de 1993 en el Municipio de Sanpedro de los Milagros el extinto ISS no tenía cobertura al no haber realizado el llamamiento a inscripción, por lo que en cabeza del empleador se encontraba la asunción de las contingencias de IVM, cubrimiento que sólo cesó cuando se subrogó en la entidad de seguridad social, por tanto, debe responder por el pago de los tiempos en los que la prestación estuvo a su cargo, pues sólo en ese evento puede considerarse liberado de la carga que le correspondía.

Ahora bien, consideró el fallador de instancia que la obligación en el cubrimiento del cálculo actuarial abarca de forma plena el tiempo de la relación laboral (21/07/1980 al 16/12/2001), apreciación que desconoce que a partir del 1° de mayo de 1994 sí aparece un recorrido de cotizaciones al sistema pensional, por tanto se **modificará la orden indicando que el cálculo actuarial comprenden los ciclos corridos entre el 21/07/1980 y el 30/04/1994**, a razón de 1 SMLMV por ser esta la base indicada en el contrato de trabajo, aquella que relataron los testigos escuchados y resulta consecuente con las cotizaciones a la AFP Porvenir en el ciclo de mayo de 1994 y siguientes.

Cálculo actuarial que liquidará Colpensiones atendiendo a las reglas del Decreto 1887 de 1994 el que comprende las fórmulas matemáticas que permite que los dineros que sean trasladados a la entidad de seguridad social satisfagan las cotizaciones del tiempo en que no realizaron las cotizaciones, los que a su vez serán el sustento de las prestaciones, fórmula que si bien integra en su cómputo una base de actualización no lo es a título de sanción sino para revertir los efectos de la pérdida del poder adquisitivo del dinero, por tanto no se acoge la súplica de modulación de la condena propuesta por la accionada Fabricato.

RESPONSABLE DEL PAGO DEL CÁLCULO ACTUARIAL

En cuanto a la existencia de una situación de unidad de empresa el artículo 194 del CST indica que esta se conforma como la unión de empleadores que bajo una dirección económica, comportante una misma explotación económica de actividades similares, conexas o complementarias, al respecto la sentencia SL15966-2016:

“tratándose de la existencia de varias personas jurídicas, como ocurre en el sub lite, para que se configure la denominada unidad de empresa, deben concurrir la existencia de una principal o matriz y otra subordinada que se denomina filial o subsidiaria. Ahora bien, esa dependencia se presenta solo cuando la primera de ellas ejerce un predominio económico sobre la segunda, por lo que, precisamente, es este elemento el que debe verificarse, a efectos de declarar la existencia de dicha figura, tal como lo ha sostenido esta Sala, entre otras, en las providencias CSJ SL6228-2016 y CSJ SL6313-2016).

Ha expresado el alto Tribunal que el elemento que genera tal unidad es el dominio económico, lo que permite diferenciar la figura de la unidad de empresa a aquella denominada grupo empresarial, esta última de contenido mercantil que se genera cuando entre diferentes entidades existe unidad de propósito y dirección, no así de predominio de capital, este último determinado por una participación en proporción superior al 50%, *al tenor del artículo 261, numeral 1° del C. de Co.* al respecto la sentencia CSJ SL6228-2016:

“Tratándose de la existencia de varias personas jurídicas involucradas en la contienda, que es lo que interesa en estricto rigor a este proceso, ambos preceptos legales refieren a una empresa principal, matriz o controlante y a otras subordinadas que son las filiales o subsidiarias. Dicha «subordinación» o «dependencia», a la luz de la norma del Código Sustantivo de Trabajo, únicamente se presenta cuando la matriz derive su control o dirección del denominado predominio económico, elemento que necesariamente debe concurrir para configurar la unidad de empresa; mientras que en lo regulado por el Código de Comercio puede surgir o depender ese control financiero y administrativo incluso sin predominio de capital o mayoría accionaria, pues lo importante para que nazca el grupo empresarial además de la subordinación es la unidad de propósito y dirección.”

Verificada la condición de predominio económico entre varias unidades empresariales, se genera el efecto jurídico de tener a las varias personas jurídicas como una sola, lo que permite al trabajador obtener el reconocimiento y pago de acreencias laborales no solo de aquella entidad que lo enganchó laboralmente, pero además de aquella que ejerce el predominio económico, esto porque tal declaratoria evita que se oculte o simule la verdadera realidad económica en detrimento de los trabajadores, permitiendo que se tenga como una única empresa a las sociedades o personas jurídicas que la integran, al respecto la sentencia CSJ SL 4293 de 2020:

“...la unidad empresarial en comento, tiene como consecuencia y/o efecto jurídico, que las diferentes personas jurídicas que componen la unidad de explotación económicas, se tengan como una sola para efectos laborales, de donde se itera, como se dijo desde el fallo CSJ SL, 23 ag. 2006, rad. 27038, la sociedad matriz o principal debe responder por las obligaciones patronales que tienen sus filiales, cuando éstas no lo hicieran, sin que pueda limitarse, como lo concluyó con error el Tribunal, a acreencias legales, pues tales prerrogativas pueden nacer de la ley o del contrato, incluso colectivo como lo es la convención colectiva laboral”.

Mismo referente jurisprudencial que alude a la necesidad de la vigencia de la relación laboral para el momento en que se genera la unidad de empresa, así:

“Se destaca lo previo, porque como también se explicó en las sentencias CSJ SL4496-2018 y CSJ SL1361-2018, para que operen los efectos jurídicos del artículo 194 del CST, la unidad de empresa debe existir en vigencia del vínculo laboral, por lo que, como con acierto lo razonó el Tribunal, los elementos configurativos de esa institución han de analizarse para la calenda en que haya tenido vigencia el vínculo laboral, en el caso, al momento en que los demandantes fueron despedidos y su empleadora existía”

Con estas premisas se descende al **caso concreto** donde la parte actora a través de la prueba testimonial y documental presentó la forma como se desarrolló su relación laboral al servicio de DIVISA mostrando que la operación de confección de ropa de hogar (sábanas, toallas) así como ropa deportiva estaba direccionada, coordinada y supervisada y remunerada por Fabricato

Elementos que resultan relevantes para el propósito pretendido y que se concretan con la prueba del predominio económico, referenciado en el certificado de existencia

y representación de Fabricato donde registra el documento del 13 de agosto de 1996 que da cuenta la situación de control de Fabricato sobre DIVISA; sustentado en el numeral 1° del artículo 261 del Código de Comercio esto es: *“cuando más del cincuenta por ciento (50%) del capital pertenezca a la matriz, directamente o por intermedio o con el concurso de sus subordinadas, o de las subordinadas de éstas...”*

Así las cosas, patente es la condición de predominio económico que genera la consecuencia de la unidad de empresa de DIVISA con Fabricato

Se destaca que al momento de inscripción de la situación de control por predominio económico la relación laboral de la señora Norelia del Socorro Patiño Molina con DIVISA estaba vigente, (ya que su hito final fue el 16 de diciembre de 2001), e incluso para el 13 de agosto de 1996 ya estaba a cargo del empleador DIVISA la obligación de asumir la carga pensional de la actora, la que no ha sido satisfecha y goza de la característica de imprescriptibilidad en tanto comporta la base para la estructuración del derecho pensional, por tanto resulta desacertada la réplica de Fabricato al pretender diferir la asunción de responsabilidad a aquello causado posterior al 13 de agosto de 1996.

Así las cosas, se confirmará la condena a Fabricato respecto al cubrimiento del cálculo actuarial a trasladar a Colpensiones para que obren como cotizaciones de la señora Norelia del Socorro Patiño Molina, empero se modifican los extremos de liquidación de tal obligación que lo son entre el 21 de julio de 1980 al 30 de abril de 1994, que se traducen en 719 semanas, teniendo como base el salario mínimo de cada anualidad.

PENSIÓN DE VEJEZ

En cuanto a la **solicitud de pensión**, para establecer el régimen aplicable y causación de la prestación pertinente es detenerse en algunos elementos probatorios adosados en el trámite, así:

- Previo al 1° de abril de 1994 la señora Norelia del Socorro Patiño Molina no tenía una afiliación al sistema de seguridad social en pensiones.

- Que la primera afiliación al sistema pensional fue al régimen de ahorro individual con solidaridad, régimen en el que permaneció y realizó cotizaciones entre el 01/05/1994 al 16/12/2001 (pág 61/66), afiliación y cotizaciones cuya validez no discute.
- Que en proceso judicial de radicado 05001-31-05-017-2017-00558 se discutió y resolvió la procedencia de la pensión de vejez al amparo del régimen de transición pensional, discusión zanjada en sentencia del 4 de septiembre de 2017 que estableció que la señora Patiño Molina, pese a contar con más de 35 años de edad al 1° de abril de 1994, nunca tuvo como régimen de referencia el Decreto 758 de 1990 y que por tanto no le es aplicable para efectos de determinar la viabilidad de la pensión de vejez (archivo N° 7 y pág 38/40 expediente escaneado), providencia confirmada por este tribunal el 14/02/2019, decisiones que surten efectos de cosa juzgada.

Premisas que aplicadas al caso concreto impiden que sobre el mismo asunto se emita un nuevo pronunciamiento dados los efectos de cosa juzgada, pero que incluso en el evento que se insistiera en tal análisis llevaría a la misma conclusión, toda vez que el régimen de transición pensional consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 permite a algunos afiliados la causación del derecho pensional bajo las reglas del régimen que les era aplicable, (al respecto la sentencia CSJ SL 3984 de 2022) condición que no satisface la actora en razón a que previo al 1° de abril de 1994 no tenía como régimen de referencia el Decreto 758 de 1990 y sin que pueda predicarse una situación de vulneración de derechos mínimos dado que la garantía pensional queda amparada bajo las reglas de la Ley 100 de 1993, en particular del literal C del artículo 33, que habilita como semanas de cotización *“el tiempo de servicio como trabajadores vinculados con empleadores que antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993 tenían a su cargo el reconocimiento y pago de la pensión”*

Así las cosas, verificada la satisfacción de los requisitos para el acceso a la pensión de vejez bajo la égida de la Ley 100 de 1993, con las modificaciones de la Ley 797 de 2003, esto es acreditados los 57 años de edad el 8 de julio de 2011 y que para tal data acumulaba 1546 semanas de cotización hay lugar al reconocimiento de la

pensión en cuantía de 1 SMLMV en tanto fue esta la base de cotización durante toda la vida; prestación que se causa a razón de 14 mesadas anuales, al cumplir con las reglas del Parágrafo transitorio 6° del acto legislativo pensional.

Sin embargo, dados los efectos extintivos solo habrán de pagarse las mesadas causadas a partir del 8 de mayo de 2016 (3 años previos a la presentación de esta acción judicial) sin que le asista razón a la activa quien pretende se genere el efecto de interrupción de la prescripción con la presentación de la previa acción judicial, en tanto los matices de tal reclamación difieren de la prestación acá declarada, como tampoco hay lugar a interrumpir los efectos de la prescripción por la reclamación elevada el 13 de julio de 2013 (tal como lo enuncia la resolución GNR 200692 de agosto 6 de 2013 – pag 22/24), ya que entre la notificación el 20 de agosto de 2013 (archivo GEN-RES-CO-2013_5676401-1377026315521 del expediente administrativo) y el ejercicio de esta acción judicial que lo fue el 8 de mayo de 2019, transcurrió un tiempo superior a 3 años

Calculado el retroactivo pensional causado desde el 8 de mayo de 2016 y extendido hasta el 28 de febrero de 2023 asciende a \$80´896.043 a pagar con indexación. Suma de la cual se autoriza compensar aquello que fue pagado como devolución de saldos \$6´131.558 más su indexación. También podrán descontarse los aportes con destino al sistema de seguridad social en salud

Año	Valor mesada	Nº mesadas	Sub total
2016	\$ 689.454	9,73	\$ 6.708.387
2017	\$ 737.717	14	\$ 10.328.038
2018	\$ 781.242	14	\$ 10.937.388
2019	\$ 828.116	14	\$ 11.593.624
2020	\$ 877.803	14	\$ 12.289.242
2021	\$ 908.526	14	\$ 12.719.364
2022	\$ 1.000.000	14	\$ 14.000.000
2023	\$ 1.160.000	2	\$ 2.320.000
TOTAL			\$ 80.896.043

A partir del 1° de marzo de 2023 se seguirá reconociendo la prestación en cuantía de 1 SMLMV a razón de 14 mesadas anuales.

Resta por indicar que se revoca la condena en costas en primera instancia a cargo de Colpensiones en tanto esta entidad fue ajena a las situaciones de omisión en el pago del cálculo actuarial acá declarado. Se confirma la condena en costas a cargo de Fabricato SA, las que también se imponen en esta instancia, tasando las agencias en derecho en la suma de 2 SMLMV.

En mérito de lo expuesto, administrando justicia en nombre de la república de Colombia y por autoridad de la ley, el TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA SEXTA DE DECISIÓN LABORAL, **CONFIRMA** la decisión tomada en primera instancia respecto a la declaratoria de unidad de empresa entre DIVISA SA y Fabricato SA, siendo esta entidad la responsable en el pago a Colpensiones del cálculo actuarial por la señora Norelia del Socorro Patiño Molina.

MODIFICA EL NUMERAL TERCERO de la sentencia respecto a los extremos de liquidación del cálculo actuarial que corresponden a los ciclos del 21/07/1980 al 30/04/1994.

MODIFICA EL NUMERAL QUINTO de la sentencia en el sentido de establecer que el derecho pensional de la señora Norelia del Socorro Patiño Molina se causó con las reglas de los artículos 21, 33 y 34 de la Ley 100 de 1993 y no como beneficiaria del régimen transición pensional.

ADICIONA la sentencia cuantificando el retroactivo pensional que causado entre el 8 de mayo de 2016 al 28 de febrero de 2023 corresponde a \$80'896.043.

A partir del 1° de marzo de 2023 se seguirá reconociendo la prestación en cuantía de 1 SMLMV a razón de 14 mesadas anuales.

MODIFICA EL NUMERAL SÉPTIMO de la sentencia autorizando a Colpensiones a descontar del retroactivo pensional los aportes con destino al sistema de seguridad social en salud, además de la suma pagada por devolución de saldos, que correspondió a \$6'131.558, con su indexación.

REVOCA PARCIALMENTE EL NUMERAL NOVENO de la sentencia absolviendo a Colpensiones de la condena en costas, las que en ambas instancias son asumidas por Fabricato y en favor de la actora. En esta instancia se tasan las agencias en derecho en la suma de 2 SMLMV.

Lo resuelto se notifica a las partes por Edicto. Se ordena la devolución del expediente al Juzgado de origen.

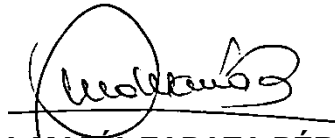
Los Magistrados,



DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN



MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA



ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ



TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN
SALA LABORAL

EDICTO VIRTUAL

La secretaría de la Sala laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín notifica a las partes la siguiente providencia:

Radicado: 05001 31 05-009-2019-00272-01
Demandante: NORELIA DEL SOCORRO PATIÑO MOLINA
Demandado: COLPENSIONES y FABRICATO
Decisión: **CONFIRMA, MODIFICA, REVOCA Y ADICIONA**

Magistrado ponente DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN

CONSTANCIA DE FIJACIÓN

Fijado hoy 15 de marzo de 2023 a las 8:00 am, desfijado en el mismo día a las 5:00 Pm y se publica en la página web institucional de la Rama judicial por el término de 1 día hábil, con fundamento en lo previsto en el artículo 41 del CPTSS, en concordancia con el artículo 40 idíbem. La notificación se entenderá surtida al término de fijación del Edicto

RUBEN DARIO LÓPEZ BURGOS
SECRETARIO